
PERSPECTIVAS, INCERTIDUMBRES Y POLITICAS ECONOMICAS EN LOS PAISES DE LA OCDE, A MEDIADOS DE 1990

1. Evolución reciente y perspectivas inmediatas.

Salvo error u omisión -como mucho conviene advertir siempre en la materia- una y otras aparecen bastante satisfactorias. Las economías de la OCDE, en su conjunto, están evolucionando hoy como se deseaba que lo hicieran o de manera no muy diferente. El crecimiento del PIB real del área se ha desacelerado moderadamente, desde un 3.6% en 1989 a según se estima un 3% en el primer semestre del año en curso; y cabe prever que se sitúe cerca de esta misma tasa, en cuanto media anual, en el bienio 1990-1991. La OCDE parece haber logrado así su soft-landing, en un ritmo de crecimiento próximo al que permite actualmente -si han de conservarse los equilibrios básicos- su capacidad de crecimiento o su crecimiento potencial. Aunque, a decir verdad, diste de estar claro que constituya en cada momento y en cada economía tal crecimiento potencial.

Cierto que, por otra parte y decepcionantemente, la tasa de inflación no ha cedido. Se ha contenido; pero no hay señales por el momento de que se inicie un proceso de desinflación. En tasa anual, el deflactor del PIB para el conjunto de la OCDE, que fue del 4,3% en 1989, se espera que permanezca en este mismo nivel tanto en 1990 como en 1991. No se trata de una tasa de inflación desbordada; pero tampoco resulta insignificante e ignorable por los agentes económicos. Cualquier choque alcista adicional puede elevarla a niveles ya claramente peligrosos; que es donde está ya en varios países individuales.

Si prescindimos de la inflación, el resto (o casi todo él) de los datos coyunturales que presenta el conjunto de la OCDE son, dentro de lo que es realista esperar, buenos o por lo menos aceptables. La inversión ha seguido progresando a un ritmo también ya desacelerado, pero todavía vigoroso y superior al del PIB: quiere ello decir que la capacidad de producción (y no sólo la producción misma) está creciendo satisfactoriamente. Se espera que continúe haciéndolo a lo largo del bienio 1990-1991. Al incremento excepcionalmente fuerte del empleo en el período 1985-1989 ha sucedido otro moderado, en torno al 1% anual, que parece

en principio suficiente en principio para hacer frente al de la población activa; aunque no baste para reducir adicionalmente las bolsas de paro surgidas de varios países europeos (y en las que hoy se ve sobre todo un resultado de la dicotomización o fragmentación de los mercados de trabajo). Los intercambios internacionales han seguido desarrollándose a un ritmo muy vivo, superior a los de los PIB. Así, en términos reales, las exportaciones de la OCDE crecieron en un 7,6% en 1989 y se prevé que crezcan en torno a un 6,5% anual en el bienio 1990-91.

2. Riesgos e incertidumbres.

Pero habrá que apresurarse -como es propio de toda crónica coyuntural que se precie- a calificar el relativo optimismo que se desprende de lo anteriormente expuesto mediante la mención de toda una serie de riesgos e incertidumbres que condicionan a corto plazo la situación de las economías de la OCDE.

El riesgo que hoy tiende a considerarse más importante es el de que la inflación -sólo contenida, como se ha visto- vuelva a acelerarse. Lo hacen temer, entre otros motivos, las escaseces surgidas en varios sectores del mercado de trabajo, que son compatibles con altos niveles de paro; el grado de utilización de las capacidades de producción instaladas, ya muy próximo al máximo anterior, registrado a principios de los años setentas; el nivel de los tipos de interés a largo plazo, revelador probablemente de expectativas inflacionistas; las fuertes o fortísimas alzas de precios de muchos activos reales y financieros.

Por otra parte, los incrementos de salarios que se están ahora produciendo, considerando el área OCDE en su conjunto, parecen por el momento compatibles con la octabilidad de la tasa de inflación a su nivel presente, habida cuenta de los incrementos registrados en la productividad; las políticas monetarias continúan siendo firmes -los tipos de interés han tendido recientemente al incremento- y las políticas fiscales no son expansivas. Entre los precios internacionales, el del petróleo, tras de haber evolucionado al alza, está haciéndolo ahora en sentido bajista. Pero la inflación aparece suficientemente engranada en el funcionamiento de nuestras economías y en el esquema de expectativas como para temer que, alcanzado un escalón, intente acto seguido alcanzar el superior, aprovechando para ello cualquier accidente o incidente.

Si el riesgo de re-aceleración de la inflación se considera hoy el más relevante, tampoco cabe ignorar el contrario: el de que la desaceleración del crecimiento se transforme en

estancamiento o recesión. Constituye este riesgo la otra cara de una misma moneda, como es obvio. Las políticas monetarias dirigidas a contener la inflación han impuesto tipos reales de interés muy altos, que constituyen una continua amenaza para la posición financiera de las empresas deudoras y de los deudores en general. Estos tipos de interés tan elevados pueden acentuar peligrosamente la volatilidad que parece haber pasado a caracterizar a los mercados financieros y de cambios, en razón probablemente de su des-regulación y globalización.

Un riesgo en el que cabe ver ya por un antiguo conocido es el dado por la persistencia de los grandes desequilibrios internacionales: por el fuerte déficit externo estadounidense y los grandes superávits nipón y alemán. Pese a sus variaciones, los tres siguen registrando niveles muy altos. El déficit norteamericano se redujo en casi un 25% (a unos 100.000 millones de dólares) en 1989; pero se prevé que siga en un importe próximo a esta cifra durante 1990-91. También ha disminuido, incluso fuertemente, hasta unos 57.000 millones de dólares en 1989, el superávit japonés; pero probablemente se dispone de nuevo a aumentar a partir de 1991, impulsado por la reciente depreciación del yen. El superávit alemán, su parte, no ha cesado de incrementarse.

Se ha convivido ya durante largo tiempo con este triple desequilibrio, sin que su persistencia haya impedido durante los últimos años un crecimiento importante de la producción y del empleo en la OCDE. Resulta difícil seguir atribuyéndole la nocividad que inicialmente se le asignaba. Los movimientos autónomos privados de capitales se han mostrado muy capaces de compensar (e incluso de sobre-compensar) el déficit americano y los superávits germano y nipón. Sin embargo, es inevitable que siga pareciendo alarmante el endeudamiento externo estadounidense, que ha hecho de la primera potencia económica mundial el primer país deudor mundial. En los superávits japonés y alemán se tiende a ver cada vez más una contribución, quizá poco reemplazable, a un ahorro mundial cuyo volumen global se estima insuficiente.

No es nada fácil, ni desde el punto de vista analítico ni desde el estadístico, dilucidar hasta que punto el volumen del ahorro en la OCDE se haya hecho en efecto insuficiente. En principio, el ahorro -por lo menos, el privado- es fruto de la decisión autónoma presumiblemente racional de un agente económico que los terceros no tendrían base para juzgar. Sin embargo, tales decisiones privadas están muy interferidas por un cuadro institucional y fiscal que puede distorsionarlas de manera grave; y cuestión muy distinta, es en todo caso la del ahorro, a menudo negativo, del Sector Público. En la práctica, a la vista de las necesidades de inversión hoy planteadas a las Haciendas Públicas,

de las derivadas de la rehabilitación de las economías de Europa Oriental y de la URSS, de las resultantes de la protección precisada por el medio ambiente, etc. no es fácil evitar la impresión de que el ahorro, en efecto, se ha hecho ya o puede hacerse insuficiente o muy insuficiente. He aquí, sin duda, otro de los riesgos que subyacen a la presente situación económica de la OCDE.

Desde una óptica estrictamente coyunturalista, las incertidumbres y riesgos económicos que implican para la OCDE los acontecimientos que están teniendo lugar en Europa Oriental y en la URSS son limitados. En efecto, las relaciones económicas entre Este y Oeste son hasta ahora demasiado débiles para que, a través de ellas, se ejerzan grandes influencias. Incluso la unificación de Alemania (sobre la que luego volverá esta Nota) puede ejercer un impacto relativamente moderado sobre el conjunto del área. Ciertamente que las dependencias mutuas pueden hacerse muy diferentes más allá del estricto corto plazo. El éxito en la transformación de las economías del Este en sistemas de empresa privada y mercado ofrecería grandes oportunidades -no exenta de ciertos costes- a los países occidentales. Su fracaso supondría, por lo menos, la ausencia de ellas; también quizá una vuelta a alguna forma de "guerra fría", cuyo coste económico acumulado ha sido sin duda enorme.

Aunque el estancamiento económico -cuando no retroceso, en términos de renta per cápita- de gran parte del Tercer Mundo durante la década de los ochentas no haya impedido el progreso de las economías de la OCDE en su segunda mitad, es evidente que tampoco lo ha favorecido, independientemente de la grave pérdida de renta potencial y bienestar económico que ha significado para los propios países menos desarrollados. En conjunto, el Tercer Mundo parece que ha incrementado su PIB en 3% (apenas por encima del crecimiento demográfico) en 1989; y que repetirá este mismo ritmo de expansión en 1990. Aunque hoy se hable poco de ella, la brecha entre ricos y pobres no ha perdido significación; por el contrario está de nuevo incrementándose, lo que no impide que ciertos países pobres hayan dejado o estén rápidamente dejando de serlo. Para referirse a sólo una de las consecuencias del ensanchamiento de esta brecha, cabría mencionar su efecto intensificador de los movimientos migratorios, que hoy dan lugar en gran número de países de la OCDE a alarmantes reacciones xenofóbicas.

3. Las políticas económicas.

No sorprenderá, tras lo dicho, que la lucha contra la inflación siga constituyendo el objetivo económico prioritario

de los Gobiernos de la OCDE, objetivo modulado a la situación de cada país y condicionado a que la presente desaceleración del crecimiento no se transforme en estancamiento o en franca recesión. Tal objetivo aparece de hecho confiado primordialmente a la política monetaria y al mantenimiento de unos tipos de interés extremadamente a la política monetaria y al mantenimiento de unos tipos de interés extremadamente elevados. Las políticas fiscales están permitiendo la reducción de los déficits (el del conjunto del área OCDE se situó en sólo 1,2% del PIB y previsiblemente descenderá en alguna décima de punto durante el año en curso) e incluso la aparición en algunos casos de superávits; pero todo ello es más bien fruto del crecimiento mismo y de la operación de los llamados estabilizadores automáticos. La opinión prácticamente unánime es que esta combinación o policy mix está excesivamente vencida por el lado de la restricción monetaria y que ello encierra peligros importantes. Pero este juicio no ha cambiado gran cosa a lo largo de lo que es ya bastante tiempo la dosificación de las políticas: siempre es mucho más fácil operar desde el Banco Central que lograr una reducción del gasto público real o decidirse a un incremento de los impuestos. Ocurre además que, hasta ahora, el conjunto del área está encajando sin excesivas dificultades el alto nivel de los tipos de interés y sosteniendo, pese a él, un buen nivel de actividad.

Como es bien sabido, en la OCDE se considera hoy que la política de demanda ha de ser simultaneada por una política enérgica "desde el lado de la oferta" o de reformas institucionales y estructurales, sin la que la primera sólo tendrá un efecto superficial y efímero. La política de demanda tiene como misión el ajuste del nivel de actividad a la capacidad de crecimiento de las economías; a la política de oferta corresponde la de lograr una ampliación de esta capacidad de crecimiento, y de la elasticidad con que el aparato productivo pueda responder a la expansión de la demanda a lo largo del tiempo. Mediante la política desde el lado de la oferta, se trata de mejorar el funcionamiento y la eficiencia de los mercados (desde los financieros al de trabajo, pasando por los de bienes y servicios transables y no transables); de reducir el "peso muerto" de los impuestos y las distorsiones por ellos introducidas en la asignación de los recursos y en los esquemas de incentivos; de reducir las excesivas dimensiones adquiridas por el Sector Público, gracias a la privatización de las empresas estatales y también de determinados servicios públicos; de incrementar sustancialmente la eficacia con que se producen y prestan los bienes y servicios públicos no privatizables. Con mayores o menores ímpetu, acierto y constancia, este género de políticas se practica o intenta practicarse hoy por todos los Gobiernos de la OCDE, sin excepción y con considerable independencia respecto a su composición y coloración política.

La estrategia de la vuelta al mercado está encontrando un eco creciente también en los países en vías de desarrollo, para no mencionar los del Este, donde por supuesto no se trata de simplemente perfeccionar su funcionamiento, sino de hacerlo posible.

Resulta difícil, por otra parte, cualquier intento de precisar hasta donde han llegado por el momento las reformas estructurales y hasta qué punto está triunfando esta suerte de nueva revolución (o contrarrevolución) liberal por ellas buscada. Se trata de cambios poco medibles, institucionales y cualitativos mucho más que cuantitativos; los indicadores sobre su alcance y efectos que se están intentando elaborar parecen hasta ahora muy poco satisfactorios. Se puede constatar que en ciertos sectores -en los que la propia creciente internacionalización de las economías imponía la desregulación- los avances de la reforma han sido rápidos. Así ha ocurrido con los mercados financieros -donde, sin embargo, la mayor volatilidad parece haber sido el precio de la mayor eficiencia-, con el tratamiento de la inversión extranjera -donde los Gobiernos han procedido en una suerte de "liberalización competitiva"- y con varios aspectos del sistema impositivo.

Otros sectores se han mostrado mucho más resistentes a la reforma. Así ha pasado, por ejemplo, con el mercado de trabajo; con el control interno del gasto público (en su definición por objetivos y en la asignación a ellos de los créditos presupuestarios); o con los regímenes de subvenciones a la agricultura y a unos y otros sectores industriales. Paradójicamente, un campo en el que la libertad de funcionamiento de los mercados parece haber disminuido desde mediados de los años setentas, pese al fuerte incremento desde entonces registrado por los intercambios, ha sido el del comercio internacional. Ha surgido un neoproteccionismo de carácter básicamente no arancelario -y por ello mismo más nocivo-, que está diseñado en gran medida para evitar las reglas del GATT. Ha reaparecido el bilateralismo -en buena medida resultado de "guerras comerciales" y de amenazas de ellas- que se opone de manera frontal al multilateralismo consubstancial a un mercado internacional abierto.

La llamada Ronda Uruguay, iniciada hace ya tres años, intenta poner remedio a esta peligrosa deriva neoproteccionista. Constituye, sin duda, la negociación con propósito más amplios y ambiciosos hasta ahora emprendida en el seno del GATT. Persigue, entre otros fines, el de reducir sustancialmente el altísimo grado de protección existente en un sector, el agrario, que venía constituyendo excepción tradicional a la liberalización de intercambios; el de someter de nuevo al Acuerdo otro extenso sector, el de los productos textiles, que había escapado a él,

el de hacer que el GATT abarque las cuestiones relativas a la propiedad industrial y a las medidas relativas a la inversión extranjera en cuanto afecten a los intercambios; el de que el propio GATT refuerce de manera decisiva sus mecanismos de tratamiento y resolución de contenciosos entre las partes.

A seis meses de la fecha que debe poner fin a la Ronda Uruguay, según es habitual en este género de negociaciones, las posiciones parecen haberse hecho especialmente inconciliables. Por mucho que acaben conciliándose, es muy probable que los resultados de la Ronda queden ampliamente por debajo de sus ambiciosos objetivos iniciales. Constituirán, en el mejor de los casos, las bases de partida del proceso que los consiga. Por otra parte, un fracaso de la Ronda Uruguay daría muy probablemente vía libre a nuevas oleadas neo-proteccionistas.

Una problemática a la que los Gobiernos de la OCDE están dando cada vez mayor importancia es la relativa a la defensa del medio ambiente. Mucho de lo que hasta hace poco se consideraba exageración o extravagancia de grupos y grupúsculos verdes ha empezado a tomarse muy en serio por los Gobiernos más grises, a medida que se acumula la evidencia del deterioro sufrido por el medio y de los costes y peligros que entraña. Esta problemática tiene una dimensión económica esencial. En su tratamiento ha de acudirse necesariamente al postulado de "quien contamina, paga". A la utilización de recursos naturales sin propietario ha de asignarse un precio que permita preservarlos o reemplazarlos. La ausencia total de contaminación es un imposible; pero la contaminación puede ser probablemente reducida de forma decisiva encareciéndola debidamente.

Los países de la OCDE se disponen a incrementar en forma sustancial la ayuda pública, bilateral y multilateral, prestada a las economías del Este; es ya muy importante la comprometida con Polonia y con Hungría. Pero, salvo en el caso muy especial de Alemania Oriental, la transparencia de recursos que esta ayuda instrumentará parece que va a quedar muy por debajo de la que permitiría calificarla de un "nuevo Plan Marshall". La tesis fundamental de la que, más o menos explícitamente, parten los Gobiernos occidentales es la de que, ya en virtud de sus dimensiones, las economías de la URSS y de Europa Oriental no pueden esperar mucho de la ayuda externa. Han de superar la situación en que se encuentran, básicamente, gracias a sus propias fuerzas y a los esfuerzos y sacrificios que permitan la liberación de su potencial productivo. Las transferencias principales que reciban de la OCDE han de ser las privadas; han de estar constituidas por la inversión directa de capital extranjero que logren atraer. (El propósito principal del recién creado "Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo" será la financiación de inversiones privadas). La experiencia de los

años setentas en los países del Este muestra que el acceso a los recursos financieros externos, cuando no se acompaña de las reformas precisas, sólo conduce el incremento del endeudamiento. Puede ser que este enfoque de la cuestión sea efectivamente el más realista; resulta en cualquier caso el más barato para los Gobiernos de la OCDE, al menos desde una perspectiva a corto plazo.

4. La coyuntura según países: los Estados Unidos.

La economía estadounidense continúa su "expansión más larga en tiempos de paz". Sin embargo, esta expansión se ha desacelerado de manera apreciablemente más intensa que en el conjunto de la OCDE, mientras que la inflación se ha contenido - o mantenido- a un nivel prácticamente igual al representativo de la media del área. El ritmo de expansión del PIB, que fue del 3% en 1989, puede no sobrepasar este año el 2% o hacerlo sólo levemente. De forma que, como en el resto de la OCDE pero de manera especialmente marcada, la relación entre crecimiento real y el de los precios -o entre el grado de desaceleración de uno y otro- es un tanto decepcionante.

La asimetría en la utilización de la política monetaria de una parte y de la fiscal, por otra, resulta especialmente obvia en el caso estadounidense. La larga batalla -si así cabe llamarla- librada desde ya hace años para la reducción del déficit público sigue sin ganarse de manera suficiente. En 1990, este déficit puede situarse, según cabe hoy prever, en unos 135.000 millones de dólares, sólo ligeramente por debajo del correspondiente al año pasado. Las últimas noticias son que, en un futuro próximo, el déficit puede de nuevo aumentar con fuerza -en virtud de un menor crecimiento de los ingresos impositivos y del mucho mayor coste para el Erario de la crisis sufrida por las instituciones de ahorro- si Presidente y Congreso no llegan a un acuerdo que lo reduzca, cambiando los parámetros presupuestarios hoy vigentes. Este acuerdo lleva varios años sin conseguirse de forma medianamente satisfactoria. Durante ellos, la ejecución del Presupuesto estadounidense ha arrojado a posteriori déficits mucho mayores que los supuestos a priori (que son los únicos sujetos a los controles de la ley GRAMM-RUDMAN). Combinado con el bajo ahorro de las economías domésticas, el déficit público ha creado en los EE.UU. una brecha entre ahorro e inversión, que se traduce en el déficit de balanza corriente. El desequilibrio de la balanza comercial -que es parte componente de él- da continuamente pábulo a reacciones y reclamaciones proteccionistas.

No faltarían en los EE.UU. motivos para temer que, en las

circunstancias descritas, la desaceleración -no tan suave- del crecimiento pudiera hacerse excesiva. Entre ellos figuraría de manera destacada el deterioro de las posiciones de solvencia de numerosos deudores e intermediarios financieros, especialmente en relación con operaciones sobre activos inmobiliarios y con OPAS muy basadas en la toma de créditos.

Aparecen con todo más convincentes las razones para prever la continuidad de la moderada expansión estadounidense actual, que puede probablemente reafirmarse algo en 1991, acompañada de una tasa de inflación estabilizada. A ello apunta la información hoy disponible, entre otros extremos, sobre la relación de los stocks a la producción corriente, las intenciones de inversión de las empresas, la tendencia de los costes laborales unitarios y de la masa salarial. El paro en los EE.UU. se ha reducido, desde hace ya unos tres años a la que parece hoy a su "tasa natural"; en ella se piensa que continuará durante el próximo futuro.

5. Japón.

El sector real de la economía japonesa ha continuado mostrando un comportamiento muy satisfactorio. El crecimiento del PIB se había proseguido a un ritmo muy vigoroso (casi un 5% en 1989); el cual no ha iniciado, como era deseable, una suave desaceleración. Como se pedía al Japón, la expansión aludida estaba siendo impulsada últimamente por la de la demanda interna. Lo que estaba permitiendo una reducción muy considerable del excedente exterior, que era otra de las solicitudes que se formulaban al Gobierno nipón. La tasa de inflación japonesa ha mostrado una tendencia alcista, pero se mantiene en niveles todavía muy moderados: se prevé que esté en torno al 2,5% en 1990.

He aquí, sin embargo, que en el sector financiero de la economía japonesa han aparecido, de manera ciertamente nada prevista, serias perturbaciones. Tanto la Bolsa de Tokio como la cotización del yen han experimentado fuertes descensos. La depreciación del yen se atribuye al enorme volumen adquirido por la exportación japonesa de capitales, a la que no equilibra ya suficientemente un excedente de balanza corriente en proceso de reducción. La baja del mercado de valores expresaría la corrección (parcial) de la desmesurada alza anterior. Una fuerte inflación en los precios de los activos ha coexistido en el Japón con la modestia de las tasas de inflación, medidas según los métodos habituales. Ha operado además en dicha bajo el temor a que la depreciación del yen llevara a la elevación de los tipos de interés; la que, en efecto, se ha producido, aunque se duda

de que en grado suficiente.

Hasta ahora -también de manera sorprendente- no han aparecido signos de una transmisión de estas perturbaciones desde el sector financiero al real de la economía nipona; mientras que si los hay de contención o incluso de un esbozo de inversión de las tendencias bajistas. Los observadores tienden a pensar que el dinamismo de fondo de que está recientemente dando muestra (una vez más) la economía nipona impedirá que tal transmisión se produzca o limitará mucho sus efectos. Estos últimos pueden ser importantes, sin embargo, sobre el sector externo, cuyo excedente -una vez superados los llamados efectos J- volverá a incrementarse. Pero hoy no parece estarse tan seguro de que ello constituya un problema tan grave como solía temerse. Por último, es obvio que la depreciación del yen puede determinar una aceleración del alza de precios en Japón.

6. La República Federal de Alemania.

El próximo 1º de Julio debe de entrar en vigor el Tratado estableciendo la "unificación monetaria, económica y social" de la República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana, unificación que nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a contemplar el 1º de Julio del año pasado. La unificación política propiamente dicha pende todavía de la compleja cuestión del status militar de la Alemania unificada.

El Tratado reemplaza el marco oriental por el D.M. y extiende todas las competencias del Bundesbank a Alemania del Este. Sienta además las bases esenciales para la transformación de las instituciones germano-orientales en las propias de una economía de mercado y empresa privada; y prevé las transferencias presupuestarias que la RFA verificará en favor de la hoy todavía RDA.

A Alemania Oriental la unificación plantea un reto económico de descomunal envergadura. El funcionamiento del aparato productivo, el sistema de gestión y las pautas de conducta han de cambiar drástica y súbitamente. Se tratará a la vez de un cambio sistémico, al régimen de mercado, y de una integración plena en uno de los mercados más avanzados y competitivos del mundo.

Por el contrario, se espera -tal es la tesis oficial, muy ampliamente aceptada- que los efectos de la unificación sobre la economía de la República Federal sean relativamente limitados y encajables. La población de Alemania Oriental constituye una cuarta parte de la primera, pero su PIB equivale sólo a una

décima parte, según se estima, del de Alemania Occidental. La reducida dimensión económica de la RDA va a permitir que una transferencia de recursos, de gran envergadura para ella, no pese excesivamente sobre la economía de la RFA. Además, se cuenta con que dicha transferencia de recursos sea sobre todo privada y voluntaria y está integrada por las inversiones que las empresas germano-occidentales o de terceros países realicen en Alemania del Este y por los créditos con estas inversiones relacionados. Gracias a todo ello, las transferencias presupuestarias propiamente dichas no tendrán por qué absorber un porcentaje muy alto del PIB alemán-occidental: no se espera que sobrepasen un 2%/2,5% de dicha magnitud por año en los inmediatamente próximos. Su financiación no exigirá una subida de impuestos, constatación grata en un año electoral. Podrá financiarse acudiendo al endeudamiento público, dada la saneada posición alemana de partida en la materia y la amplitud del mercado alemán de capitales. Cuando se examinan todas las magnitudes relevantes, parece que tampoco la unificación monetaria en sí misma tiene por qué suponer un choque inflacionista mayor: el incremento de la cantidad de dinero en D.M. no va a ser mayor que el que registre el PIB ahora denominado en esta misma moneda.

Todo ello puede parecer demasiado bello para ser demasiado cierto. La clave va a estar en realidad en la reacción de la economía de Alemania Oriental a la enorme problemática ante la que la unificación le sitúa.

Por otra parte, la unificación se emprende en un momento en que la coyuntura alemana-occidental se había hecho muy expansiva. Lo que de un lado complica la situación, al no dejar disponible un margen de capacidad no utilizada para encajar el choque de demanda que pueda provenir de Alemania Oriental y de las inversiones en ella realizadas. Por otro lado, la expansión está generando los recursos adicionales con que atender a las necesidades que de la unificación surjan. Se había sostenido muchas veces -en primer lugar, por los propios alemanes- que la alemana era ya una economía muy madura de la que sólo cabía esperar un crecimiento lento; pero el crecimiento del PIB de la República Federal fue del 3,6% en 1988 y del 4% en 1989 y se prevé un incremento análogo al del año anterior en el presente. Ha surgido una presión alcista sobre los precios, aunque se proyecta que la tasa de inflación no sobrepase el 3% en 1990. Se ha producido ya -anticipándose a los acontecimientos- una alza importante de los tipos de interés a largo plazo, que se traducirá normalmente en una tendencia también al alza del D.M., quizá ya esbozada.

A través de varios mecanismos, el impacto de la unificación alemana se extenderá al resto de la O.C.D.E. Pero si las reducidas dimensiones iniciales de la economía germano-oriental

atenúan efectivamente los efectos de la unificación sobre la propia RFA, es de esperar que las economías de terceros países los experimenten, al menos a corto plazo, de manera ya muy amortiguada. Para determinados países y en determinados aspectos -como los relacionados con la posición de Alemania en la CEE y la contribución alemana a los fondos comunitarios de carácter regional o estructural o bien con los destinos de las exportaciones alemanas de capital- dichos efectos pueden ser, con todo, de importancia muy considerable.

7. Francia, Italia y el Reino Unido.

En Francia, la virtud -encarnada por una política económica que ha perseguido tenazmente la restauración y preservación de los equilibrios macroeconómicos, así como la mejora de la eficiencia microeconómica -ha sido al cabo recompensada. Los dos últimos ejercicios han sido buenos, tanto desde el punto de vista del crecimiento -que se situó en una media anual del 3,4%- como cuando se consideran otros indicadores. A un ritmo de expansión algo desacelerado, que se proyecta hoy en torno a un 3% anual, el bienio 1990-91 también promete ser muy aceptable. De acuerdo con las actuales previsiones, se caracterizará por una tasa inflación estabilizada e incluso en ligero retroceso, que será una de las más bajas en la OCDE; por un déficit apenas significativo de balanza corriente; y por la reducción a un porcentaje del PIB cercano al 1% del déficit del Sector Público. Casi el único indicador que continuará siendo negativo será la tasa de paro, que todavía permanecerá por encima del 9% de la población activa.

La estabilidad del tipo de cambio -con el F.F. firmemente anclado al D.M., en el cuadro del Sistema Monetario Europeo- ha constituido, para las Autoridades francesas y también para la mayoría de los observadores, la clave principal de la estrategia económica seguida durante los pasados años. En torno a ella se ha articulado un amplio conjunto de medidas macro y microeconómicas: una política monetaria rigurosa; el control del gasto público y la reducción sostenida del déficit; la reforma fiscal; la mejora de la flexibilidad de los mercados y en especial del mercado laboral, etc. Pocas de estas medidas, consideradas aisladamente, han sido espectaculares; pero su suma y la persistencia con que se han aplicado les ha dotado de eficacia. Sin ellas, el mantenimiento de la cotización del franco no hubiera durado mucho o hubiera sido contraproducente. Por otra parte, para el actual Gobierno francés es imperativo que se prosiga la política de rigor y reforma: los logros conseguidos durante los últimos años están lejos de poder darse por consolidados.

Exitos y fracasos -o premios y castigos- se distribuyen entre las economías nacionales no necesariamente de acuerdo con lo que las políticas económicas en cada caso practicadas harían esperar. En Italia, la bastante obvia falta o escasez de virtud denotadas por las políticas en vigor (o por la ausencia de ellas) parece estar siendo bastante poco castigada, en todo caso de manera directa e inmediata. El Sector Público italiano, ha seguido registrando durante los dos últimos años un déficit superior al 10% del PIB; y se prevé que continúe haciéndolo en los dos próximos. Por su parte, la política italiana de reformas estructurales parece de las menos decididas de la OCDE; aunque su necesidad -especialmente en lo que se refiere al funcionamiento de los servicios públicos- sería una de las más evidentes dentro del área. Con todo y a la luz de los indicadores habituales, el historial reciente de la economía italiana no parece tan malo; ni se prevé un empeoramiento brusco de él durante el próximo futuro. En 1988-89, el PIB italiano creció incluso algo más que el francés; en 1990-91, se proyecta que el crecimiento anual quede algo por encima del 3%. La tasa de inflación italiana, para la que no prevé una aceleración importante, está en torno al 6%, que constituye un porcentaje ciertamente elevado, pero no desbordado en términos comparativos. Tampoco es excesivo, ni parece amenazar con serlo en el futuro próximo, el déficit de balanza corriente (algo más del 1% del PIB en 1989). Así pues la economía italiana prospera con cierto vigor, pese a los muchos y conocidos obstáculos que en Italia se oponen a su progreso; progresaría aún más y en dimensiones distintas de las captadas por las estadísticas usuales -cabe sin embargo suponer- si dichos obstáculos no fuesen tantos. En la elevada y persistente tasa de paro italiano -un 12% de la población activa, con un 20% en el Sur frente al 5,5% del Norte- puede verse una gran manifestación de las distorsiones que lastran la economía italiana. Aunque, después de todo, no se trate de una tasa de paro muy superior a la francesa.

Pero el caso más paradójico parece el del Reino Unido, donde diríase que quien ha sido castigada es la virtud económica. A lo largo de los años ochentas, los Gobiernos de la Sra. Thatcher han aplicado con la mayor convicción una política de gran disciplina fiscal, de altos tipos de interés y de decididas y profundas reformas estructurales. Sin embargo, desde mediados en 1987 a mediados de 1989 ocurrió un desbordamiento muy intenso de la demanda, motivado principalmente por un rápido descenso de la tasa de ahorro, que cogió a las Autoridades muy por sorpresa y al que tardaron en reaccionar con la energía precisa. La economía británica se encuentra ahora sometida a una cura restrictiva, que ha debido hacerse francamente drástica y deberá prologarse bastante, según parece, para ser eficaz y permitir que se inicie un descenso en la tasa de inflación, que en 1989 alcanzó al 6,5%

y en los primeros meses de este año ha tocado el 10%. No se espera que la tasa de crecimiento supere gran cosa el 1% durante el ejercicio en curso. En el Reino Unido los logros microeconómicos -que se confiaba acercasen la productividad y el PIB per cápita británico a los de los países más ricos de la OCDE- han quedado así por el momento sumergidos bajo los desequilibrios macroeconómicos y los costes de su corrección.
